

NAYIB BUKELE EN EL SALVADOR

La expresión política de la indignación llega a gobierno

Arysbell C. Arismendi V.

Periodista El Faro.Net

Nayib Armando Bukele Ortiz llega a la presidencia de la República de El Salvador a los 37 años de edad, luego de una carrera política que bajo los parámetros del sistema político nacional podría categorizarse como perfecta. Un proyecto que inició en 2012 en la alcaldía de un pueblo de apenas 15 kilómetros cuadrados y que culminó seis años después como autoridad máxima de San Salvador, la capital.

A El Salvador llegó con Bukele la expresión política de la “indignación”, que ya ha recorrido otros países del mundo. Esa expresión llegó con una persona que se había dedicado toda su juventud al negocio de la publicidad, de la mano de su padre, el empresario de origen palestino Armando Bukele Kattán. Un hombre que estuvo relacionado con diferentes actores políticos y que, pese a la xenofobia de las élites económicas, logró ganarse el respeto a base de fórmulas empresariales exitosas.

Así fue como Nayib Bukele nació en política: abanderado por los amigos de su padre, un grupo pequeño de dirigentes de la extinta guerrilla convertida en partido político de izquierdas bajo las siglas del FMLN. El joven Bukele asistió al período de la desintegración ideológica, rompió de inicio con los paradigmas “exitosos” de los viejos guerrilleros y se rodeó de un grupo de amigos con los que antes había ideado estrategias de marketing para impulsar sus negocios familiares y personales. Como si fuera una marca, Bukele comenzó a mostrarse en el mercado político como un personaje necesario.

Promovió gestiones de gobiernos locales con foco en la mejora de la infraestructura y el uso de los espacios públicos como una salida temporal a los problemas de violencia, inseguridad y desigualdad en las municipalidades que administró. Al mismo tiempo que hizo de las redes sociales su canal de comunicación, y comenzó a mostrarse en desacuerdo con las acciones del FMLN. Una izquierda que, así como ha sucedido en Latinoamérica, comenzó a actuar con base a intereses personales.

En un principio, Bukele era un defensor del instituto que lo abanderaba pero, después, los desacuerdos llevaron a capitalizarlo como el político rebelde al status quo, como el “mesías”. Esa caricatura sugerente de redención intentó consolidarse de forma intencional, mientras los partidos políticos tradicionales actuaban el guión perfecto para legitimar el resentimiento hacia las extremas. Bukele en cambio, siendo candidato presidencial, comenzó a decir que era un hombre “sin ideología”. Esa imagen redentora logró colarse en los marcos morales de una enorme porción de la población para

sugerirles la vieja idea de un cambio. Pero no uno cualquiera, sino uno de no retorno, que parecía absoluto, desarraigado y por lo tanto muy fácil de comprar.

En octubre de 2017, siendo alcalde de San Salvador, Bukele fue expulsado de las filas del FMLN. El político buscó formar su propio partido para participar en las presidenciales de febrero 2019, pero el tiempo no alcanzó. Compitió por un partido pequeño de derecha, Gana, acción que para sus simpatizantes poco importó. El mensaje de que sólo era un vehículo partidario para llegar al poder cuajó.

Bukele capitalizó la furia contenida en contra de la clase política tradicional y anunció la asunción de un nuevo político, al que todavía no ha dado forma ni contenido. Este fenómeno logró remover los escombros de las grandes preguntas que la población hace tiempo no se tomaba en serio, y que parecían haber sido soterradas de forma definitiva desde los Acuerdos de Paz de 1992. El joven empresario ganó las presidenciales con la votación más alta de la historia democrática del país, en número, sin haber recorrido todo el país. Ganó la campaña del descontento y así dio por terminada la posguerra: un período donde los dos rivales del conflicto armado (Arena, el partido grande de derechas, y el FMLN, la guerrilla) se habían repartido el Ejecutivo durante las últimas cuatro décadas.

El Salvador está a la expectativa de cómo podría gobernar Bukele. Mientras se muestra cercano a impulsar la inversión privada como el motor base para el desarrollo del país, y ofrece un plan ambicioso de infraestructura para incrementar el empleo y mejorar el acceso a la educación, la salud y las oportunidades de vida, el político parece actuar entre coyunturas e intenta instalar desenlaces satisfactorios para su discurso, uno en el que los sectores desprotegidos no logran estar más allá de los cortos gestos publicitarios de acompañamiento. Una estrategia que fue valiosa en campaña, pero que para gobernar se queda corta. Todavía son muchas las problemáticas que aquejan a este pequeño país de Centroamérica y que necesitan soluciones a corto y mediano plazo.

Las demandas de país

Hay tres temas principales que preocupan a la sociedad salvadoreña, según los estudios de opinión pública: corrupción, inseguridad y migración. Aunado a estos elementos, sociedad civil, organismos internacionales y actores políticos creen en la urgencia de una reforma fiscal integral que permita sanear las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal y disminuir la deuda pública que alcanza el 70 % del Producto Interno Bruto.

En el ámbito social, aunque el número de homicidios ha presentado leves disminuciones, el control del territorio por parte de las pandillas y el enfrentamiento de éstas con las fuerzas de seguridad del Estado siguen siendo una realidad que termina afectando a las comunidades más vulnerables. A pesar de ello, no parece vislumbrarse una política

pública que busque plantear un diálogo sincero y transparente con estas estructuras criminales, con el objetivo de su desmantelamiento y reinserción social.

Para el combate a la corrupción, el presidente electo propone la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad que replique la iniciativa implementada en Guatemala. Con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas, la CICIG se convirtió en el país vecino en el brazo investigador de la Fiscalía General de la República y logró desmantelar estructuras de corrupción que alcanzaban el máximo órgano de Estado: Presidencia.

Casos judiciales han demostrado que en El Salvador la corrupción también está enquistada en la cabeza del Ejecutivo. Pero, peor aún, en quienes dirigen el Ministerio Público. En la actualidad, el país tiene a tres expresidentes acusados de malversación de fondos y lavado de dinero -uno de ellos condenado a 10 años de prisión-, y un Fiscal General que también habría actuado en favor de intereses personales y en detrimento de la institución responsable de la persecución penal. En este sentido, Bukele propone una comisión anticorrupción para El Salvador. La propuesta tiene respaldo en algunos sectores de la sociedad pero, como analizaremos más adelante, requeriría la aprobación del Parlamento.

Para las áreas de seguridad y violencia, el político hace énfasis en la protección de las instituciones educativas ubicadas en territorios controlados por pandillas, y en la promoción de una ley que también permita el resguardo de los espacios públicos. Propone la creación, por ejemplo, de un plan de seguridad territorial que permita garantizar a diario la integridad de los ciudadanos, pero del que no ha dado detalles.

Bukele, sin embargo, parece dejar por fuera una realidad que sectores académicos y de la sociedad civil creen urgente: buscar un acercamiento con las pandillas que permita alcanzar una solución a la violencia. En su plan de gobierno, el presidente electo no tiene asentado un posible diálogo, y públicamente tampoco ha querido posicionarse al respecto. En un país con una de las tasas de homicidios más altas del mundo, donde la violencia pandilleril es la causa principal de esos asesinatos, es trascendental la construcción de una política amplia que pase por reconocer el origen sociocultural y socioeconómico al que responde la conformación de estas organizaciones criminales.

Otro de los fenómenos que El Salvador viene arrastrando desde el conflicto armado, incluso varios años atrás, es la migración irregular. Actualmente, el país tiene un estimado de 6 millones de habitantes residentes en su territorio y otros 1.3 millones en Estados Unidos, según la última cifra manejada por la Organización Internacional para las Migración de Naciones Unidas. De esa cifra, 700 mil permanecen de forma irregular y el resto está amparado en algún programa de residencia temporal o tiene la ciudadanía estadounidense. La gente cada vez migra más por razones de violencia. Esta no es una problemática propia sólo de El Salvador, sino también de Honduras y Guatemala, tres

países que constituyen lo que se conoce como “El Triángulo Norte de Centroamérica”. En el último año, la migración en la región ha mostrado su cara más dura: miles de hondureños y salvadoreños saliendo en masa, a la luz del día, caminando y cruzando todo el camino hasta México para luego cruzar la frontera con Estados Unidos.

La respuesta de Donald Trump no ha sido de acogida sino de, más bien, radicalizar la política antiinmigrante de EEUU. Ha reforzado la militarización de la frontera; ha llevado a cabo una política de separación de familias una vez los migrantes son detenidos cruzando ilegalmente; insiste en la construcción de un muro en la frontera con México que permita frenar por completo la migración; y más recientemente ha ordenado la suspensión de la ayuda económica que Estados Unidos entrega cada año a los países del Triángulo Norte, como una forma de implementar políticas de desarrollo que contribuyan a reducir la migración hacia ese país.

Bukele, por su parte, ha dicho que buscará una solución consensuada con el gobierno de Trump para solventar la situación de miles de salvadoreños. Tanto de aquellos que buscan una residencia permanente o que permanecen de forma ilegal. La primera gira del nuevo presidente, después de las elecciones, fue precisamente a los Estados Unidos. Desde la sede de uno de los tanques de pensamiento más conservadores de ese país, The Heritage Foundation, Bukele pronunció un discurso en el que ofreció a EEUU ser su principal aliado en la región y prometió que acabaría con la migración irregular antes de finalizar su gobierno. Una promesa que analistas consideran arriesgada de cumplir, pero que puede servir a Bukele para tranquilizar a quien busca convertir en su amigo.

Mientras tanto, en El Salvador, Bukele propone un programa de infraestructura pública multimillonario que busque elevar la inversión privada y el empleo para alcanzar niveles de crecimiento económico superiores al 4 % al final del quinquenio. En la última década, el crecimiento de la economía en El Salvador no ha superado el 2.5 %. Para alcanzar esa cifra, entre otras cosas Bukele propone diseñar un “tratamiento tributario especial” para atraer inversión extranjera y, al mismo tiempo, crear tributos dirigidos al gran capital como la renta mundial (gravar las ganancias que residentes tengan en otros países del mundo) y el impuesto predial o a la propiedad. Una dicotomía que expertos ven con escepticismo y sobre la que esperar una propuesta clara en los próximos meses.

El perfil del futuro gabinete

La definición del curso de un gobierno inicia con la selección de su gabinete. A la fecha, cuando faltan dos meses para que se instale el nuevo gobierno, Nayib Bukele no ha anunciado ninguno de los nombres que estaría manejando para asumir la dirección de las diversas carteras del Estado. Por lo pronto, tanto él como sus voceros sólo han insistido en

que serán perfiles “sin ideología” y que estarán exentos de señalamientos de irregularidades o corrupción.

Bukele no parece tenerlo fácil en este sentido, tampoco: a diferencia de los partidos de gobierno anteriores, con más años de funcionamiento y participación en administraciones anteriores, el nuevo presidente llega acompañado de un equipo que es relativamente nuevo en política y con un movimiento que se convirtió en partido hace menos de un año. Buscar perfiles vinculados a Arena y al FMLN tampoco parece ser una alternativa, puesto que ha sido el mismo Bukele quien los ha calificado de ser los responsables del estancamiento del país en materia de transparencia, seguridad, justicia social, empleo.

El círculo cercano del presidente electo, es decir, el que lo ha acompañado desde su primera gestión como alcalde y luego en campaña presidencial, está constituido en su mayoría por familiares, socios, compañeros de juventud, exempleados. Personas vinculadas más a los negocios del nuevo mandatario o de su familia, que a la administración pública u otro sector de la sociedad, con algunas excepciones.

Una constante que ha repetido como funcionario público ha sido otorgar cargos “ad honorem” a familiares. Sin embargo, para gobernar Bukele necesita más que eso. Puede que esté implementando alguna fórmula para encontrar otros perfiles que le permitan completar un gabinete idóneo a las circunstancias, pero hasta la fecha no lo ha informado. La conformación de su gabinete y de una transferencia ordenada de su gobierno es, hasta ahora, un tema hermético.

Para la construcción del equipo de gobierno será indispensable elegir con prudencia a los funcionarios responsables del manejo de fondos públicos o de la implementación de políticas de transparencia, así como aquellos que deban diseñar la política de seguridad del Estado. Será clave acabar con la herencia de funcionarios de administraciones anteriores que actualmente están acusados o condenados judicialmente por malversación de fondos o lavado de dinero, y también de quienes son señalados de avalar uso excesivo de las fuerzas de seguridad y de ejecuciones extrajudiciales, fenómenos que la Organización de Naciones Unidas ha reclamado erradicar.

Bukele deberá elegir funcionarios comprometidos con la ética pública y con el respeto a los derechos humanos; funcionarios que comprendan la violencia como un problema estructural que también tiene origen en la desigualdad social que ha enfrentado El Salvador por décadas.

En el nuevo gobierno, también será importante la elección de los ministros de Hacienda, Economía, Educación y Salud. Cuatro carteras que serán trascendentales a la hora de diseñar una reforma fiscal que permita aliviar las finanzas públicas. El Salvador tiene una deuda pública que asciende al 70% del Producto Interno Bruto. Cada año, el país se

endeuda más y más y cuando se necesitan recortes, son las áreas de salud y educación las más afectadas. Bukele ha dicho que buscará implementar una reforma fiscal integral, pero esto deberá pasar no sólo por un acuerdo con las demás fuerzas políticas sino también por las actuaciones de los ministros en estas áreas. El país requiere, además, incrementar la cobertura del sistema educativo y de salud para todos los estratos sociales, que hoy se mantienen relegados de ese acceso.

En El Salvador tampoco existe un marco normativo que regule la gestión del agua. El recurso es utilizado en un 52 % para actividades de la industria agroindustrial, dejando a comunidades rurales sin el acceso y elevando su costo para el consumo humano. En este sentido, Bukele propone construir reservas de agua y aprovechar las estaciones de lluvia para invertir en regadíos sostenibles que minimicen o erradiquen la explotación de agua subterránea, además de verificar y supervisar los métodos de producción agrícola con el fin de disminuir el impacto ambiental. En esta misma línea, pero con poca profundidad y sin un planteamiento integrado, Bukele propone en su plan de gobierno desde promover una educación escolar que enseñe el cuidado del medio ambiente hasta crear impuestos a la adquisición de automóviles para impulsar el uso de otros medios de transporte alternativos, menos contaminantes.

En administración gubernamental, Bukele propone hacer cambios en la forma que se organiza el Ejecutivo. Dice que agrupará a las carteras de Estado en una especie de sub-gabinetes para diseñar políticas de gobierno de forma “integral”, y que éstos estarán liderados por “comisionados”. En su planteamiento, también habrá un “comisionado” a cargo de todo el gabinete, que le reportará a él directamente, y otro en específico “para la corrupción”. Se desconoce si ese “comisionado para la corrupción” será el encargado, por ejemplo, de la implementación de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Por ahora, Bukele ha delegado esa tarea en su compañero de fórmula y vicepresidente electo, Félix Ulloa. Este abogado de profesión participó en el grupo de contacto político de la guerrilla, durante el conflicto armado, y llegó a ocupar un cargo como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, órgano encargado de todo lo relacionado a los procesos electorales. Para participar en las elecciones presidenciales, también tuvo que inscribirse como militante de Gana y participar junto a Bukele con esa bandera.

Sobre la paridad de género en la conformación del gabinete, poco se sabe. Bukele no se ha pronunciado en este sentido y tampoco lo ha dejado asentado en su plan de gobierno. Sus equipos de trabajo han estado integrados en su mayoría por hombres, pero algunos nombres de mujeres han sonado para dirigir carteras de Estado como el Ministerio de Cultura. En referencia a políticas públicas enfocadas en la población femenina, plantea institutos de capacitación que eleven su formación política y educación en derechos sexuales y reproductivos. También considera que debe ser una prioridad la creación de una ley de educación sexual, propuesta que en la legislatura fue presentada en el

Parlamento a iniciativa de un diputado de Arena pero que no contó con el apoyo legislativo necesario para ser discutida.

El desafío de la gobernabilidad

La presidencia de Nayib Bukele plantea un desafío para la gobernabilidad del país. Primero, porque alguna de sus propuestas insignias deberán ser autorizadas por el Parlamento salvadoreño. Segundo, porque ese Parlamento está actualmente bajo el control mayoritario de los partidos que le fueron adversos en la campaña presidencial. Y tercero, porque después de las elecciones del 3 de febrero hubo un primer intento de medir fuerzas en el órgano legislativo que demostró que Bukele sí cuenta con el apoyo de un grupo de diputados, pero que éste no logra alcanzar siquiera la votación mínima para alcanzar acuerdos: mayoría simple. Es decir, la mitad más uno.

Después del conflicto armado que terminó a principios de los noventa, el Parlamento salvadoreño ha estado integrado, casi siempre, por cinco fuerzas políticas. Los dos grandes partidos de derechas e izquierdas, Arena y el FMLN, y los partidos pequeños de derechas PCN, PDC y Gana. En algunos períodos, como el actual, también participa el partido de centro-izquierda Cambio Democrático o CD. Arena fue el partido de gobierno durante la guerra, y el FMLN nació de la integración de los grupos insurgentes. Acabado el conflicto, Arena gobernó El Salvador durante 20 años, y el FMLN en los últimos 10. Desde 1994, ambos también se han repartido las bancadas más numerosas del Parlamento.

Actualmente, de 84 diputados (una sola cámara), los partidos de derechas, Arena, PCN, PDC y Gana, suman 59; y los de izquierdas, FMLN y CD, 24 parlamentarios. Hay un sólo diputado no partidario. Es decir, las derechas controlan el Parlamento. Pero, en el caso de Bukele, el escenario puede parecer más desalentador: tanto Arena como el FMLN -con las bancadas más numerosas- fueron sus adversarios en las elecciones presidenciales y han dicho que ejercerán oposición a su gobierno. Y esa oposición, por ejemplo, puede jugar en contra de las propuestas de país que el político ha prometido.

En la actualidad, por ejemplo, ni Arena ni el FMLN están de acuerdo con la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, y hasta la fecha sólo el partido de izquierdas ha respaldado, al menos en discurso, la creación de impuestos para la élite económica del país. Pero, sólo con el FMLN, no puede lograrlo. Además, cualquier préstamo para el Ejecutivo también necesita el aval del Parlamento.

En los dos primeros meses como presidente electo Nayib Bukele tampoco ha dado señales de que aceptará, fácilmente, dialogar con las demás fuerzas políticas para buscar consenso. La estrategia parece centrarse, más bien, en un discurso presidencial que active la presión de la población sobre las decisiones del Parlamento, y que éste termine

actuando a favor del gobierno ante los costos políticos que el descontento de la ciudadanía pueda ocasionarles en futuras elecciones.

Un ejercicio que probó a mediados de febrero cuando pidió redireccionar un préstamo legislativo para la construcción de 50 escuelas. Hizo el planteamiento a través de la bancada de Gana, el partido que lo llevó como candidato presidencial, pero que terminó apoyado incluso por cuatro diputados de Arena, su principal contrincante en las elecciones presidenciales. La propuesta, sin embargo, logró sumar tan sólo 15 votos, insuficiente para por lo menos entrar a discusión.

Ejercer un discurso de confrontación, es decir, de plantear la idea de que el otro bloquea cada una de sus iniciativas porque éstas son en contra de los intereses de los partidos tradicionales o del estatus quo, tal y como lo hizo en la reciente campaña presidencial, puede servirle también a Bukele para 2021, cuando se produzcan nuevas elecciones para diputados y alcaldes y pueda competir con candidatos del movimiento político que convirtió en partido a finales del año pasado, Nuevas Ideas. Pero para algunos analistas esta estrategia no sería la adecuada para mantener su respaldo popular y cumplir con las expectativas y las demandas de la ciudadanía.

El analista político y firmante de los Acuerdos de Paz, Roberto Cañas, que además ha mostrado su apoyo al movimiento del nuevo líder, sostiene que Bukele debe buscar un acuerdo de nación con las demás fuerzas políticas. Es decir, un acuerdo que permita definir los ejes principales de trabajo que debe abordar el gobierno y que pueda contar con el apoyo legislativo para llevarlo a cabo; así como acordar una reforma fiscal integral y la posibilidad de que el Ejecutivo integre funcionarios provenientes de todos los partidos políticos. Como un gobierno de unidad. Cañas estima que si no logran consumir algunas de sus grandes apuestas en los dos primeros años de su gobierno, Bukele no podrá hacerlas luego. Situación que sería contraproducente para un país que ha depositado una nueva esperanza en el joven político, y que necesita de cambios profundos para erradicar problemáticas estructurales como la desigualdad, la violencia y la corrupción.

El triunfo de Nayib Bukele también abre las puertas a ciertos cambios en la región. Por un lado, se ha convertido en un referente regional para las candidaturas presidenciales. Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala, no sólo ha reiterado su admiración por el joven político salvadoreño sino que, al igual que él, dice que impulsará una transformación radical en la forma de hacer política. Al igual que Bukele, Aldana se respalda en un movimiento ciudadano nacido en 2015 contra la corrupción y las malas prácticas de los partidos tradicionales. Busca participar en las elecciones presidenciales de junio de este año.

En política exterior, algunas cosas también cambiarían. A diferencia del gobierno actual salvadoreño, que está en manos del FMLN, Bukele ha prometido quitar el respaldo al

gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y a Daniel Ortega en Nicaragua, su vecino cercano. Un rechazo que ya habían anunciado también Panamá y Costa Rica. Muchos ahora se preguntan si en el corto plazo podrá existir una Centroamérica que tenga objetivos en común claros, en un momento en el que los principios democráticos parecen no regir algunos gobiernos de la región, teniendo mandatarios que buscan perpetuarse en el poder violando la Constitución, controlando las instituciones públicas del Estado o encarcelando a quienes protestan o disienten de las decisiones del gobierno.